

## **I COLOQUIOS DE REASEGURO IBERIA**

**“Construyendo el futuro juntos: El valor añadido de nuestra relación en un mundo en profundo cambio.”**

**Organizado por MUNICH RE**

**Baiona, del 6 al 8 de mayo 2026**

**7 de mayo de 2026, 10.25 horas**

**Conferencia: “El cambio climático: una realidad.  
Soluciones para el desafío”**

**Pedro Tomey**

**Presidente de la Asociación Cluster Catástrofes**

Buenos días a todos.

Quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a Munich Re por su invitación a participar en estos primeros Coloquios de Reaseguro Iberia, en un foro especialmente oportuno para reflexionar conjuntamente sobre la evolución del riesgo catastrófico en un contexto internacional caracterizado por la transformación climática, la creciente interdependencia de las infraestructuras críticas y la necesidad de reforzar los mecanismos de resiliencia económica y social.

Mi intervención se estructurará en torno a cinco ejes principales: el contexto actual de transformación del entorno de riesgos; las principales conclusiones del Barómetro de Catástrofes en España 2024; algunas dinámicas de riesgo especialmente relevantes en España; las prioridades de actuación derivadas de las lecciones aprendidas en los últimos años; y, finalmente, el significado estratégico de la Directiva CER y de la Mesa Técnica Permanente de Seguimiento como instrumentos para reforzar la resiliencia territorial e infraestructural.

Pues bien, voy a comenzar situando brevemente el contexto en el que está evolucionando actualmente el entorno de riesgos en nuestro país y en el conjunto del espacio europeo.

España se encuentra en un punto de inflexión en la gestión de riesgos catastróficos.

Durante décadas, los fenómenos extremos fueron analizados como episodios relativamente aislados o “cisnes negros” dentro de series históricas largas. Sin embargo, en los últimos años se está consolidando un cambio de enfoque que responde a la constatación de que el entorno de riesgos está experimentando una transformación progresiva y estructural.

Las crisis climáticas están modificando simultáneamente la frecuencia, la intensidad, la distribución territorial y el impacto económico de los eventos extremos. Esta transformación afecta directamente a la exposición de las infraestructuras críticas, a la continuidad de los servicios esenciales y a la estabilidad del tejido productivo.

A esta evolución del riesgo climático se añade un contexto internacional caracterizado por la creciente inestabilidad geopolítica.

Conflictos como los de Ucrania u Oriente Medio ponen de manifiesto hasta qué punto la seguridad de los países europeos depende hoy de la resiliencia de sus sistemas energéticos, hídricos, logísticos y digitales.

Cuando se produce la interrupción del suministro eléctrico, del abastecimiento de agua, del transporte ferroviario o de las telecomunicaciones, no solo se generan daños materiales directos. Se producen también efectos indirectos que afectan a la actividad económica, a la seguridad de las personas y al funcionamiento ordinario de las instituciones.

En este sentido, resulta especialmente significativo el paso que acaba de dar el Gobierno de España con la aprobación de la creación de la nueva Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, así como de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, concebida como un instrumento de colaboración multisectorial y como un foro permanente de participación y diálogo entre administraciones públicas, comunidades autónomas, entidades locales y sociedad civil.

Se trata de una decisión que refuerza el enfoque preventivo y proactivo del sistema, dotándolo de mayor capacidad de coordinación y planificación ante emergencias cada vez más frecuentes y complejas.

En este marco, tanto el Observatorio de Catástrofes como la Asociación Cluster Catástrofes tenemos un papel relevante que aportar a través del conocimiento acumulado, el análisis técnico y la experiencia de colaboración público-privada desarrollada desde 2015.

Quiero subrayar además que Protección Civil y Emergencias ha venido participando activamente y de forma continuada en el Think Tank del Observatorio, lo que ha permitido consolidar un espacio de diálogo técnico especialmente valioso entre administraciones públicas, sector asegurador, comunidad científica y otros actores clave.

Asimismo, la resiliencia de las infraestructuras críticas adquiere en este escenario un valor estratégico creciente. Y es precisamente en este ámbito donde el sector asegurador y reasegurador desempeñan un papel esencial como generador de conocimiento sobre la exposición al riesgo y como agente de estabilización económica tras eventos extremos.

Desde esta perspectiva resulta especialmente útil analizar qué nos dicen los datos más recientes sobre el impacto real de las catástrofes en nuestro país.

Por este motivo, me gustaría compartir con ustedes algunas de las principales conclusiones de nuestro Barómetro de Catástrofes en España 2024, que constituye una herramienta de análisis orientada a cuantificar el impacto económico, social e infraestructural de los eventos extremos.

El ejercicio 2024 ha quedado registrado como uno de los años más relevantes en la historia reciente del impacto de las catástrofes en España.

Las estimaciones del Barómetro sitúan el impacto económico total de las catástrofes en 11.330 millones de euros, lo que representa uno de los niveles más elevados registrados en nuestro país en las últimas décadas.

De este total, el sistema asegurador español, a través del Consorcio de Compensación de Seguros y de las entidades aseguradoras privadas, asumió aproximadamente 6.813 millones de euros en indemnizaciones.

Este dato refleja con claridad el papel estructural que desempeña el seguro como instrumento de estabilización económica tras eventos extremos y como mecanismo esencial de recuperación de la actividad productiva en los territorios afectados.

Dentro de este contexto general, la DANA de Valencia concentró por sí sola el 83% del total de la siniestralidad asegurada del ejercicio.

Sin embargo, junto a la magnitud económica de los daños asegurados existe otro indicador especialmente relevante: la brecha de protección existente frente a catástrofes naturales.

Durante 2024 estimamos que aproximadamente 3.287 millones de euros en daños no estuvieron cubiertos por mecanismos aseguradores y tuvieron que ser asumidos directamente por familias, pequeñas y medianas empresas y administraciones públicas.

Este dato pone de manifiesto que, pese al elevado grado de desarrollo del sistema asegurador español, siguen existiendo ámbitos relevantes en los que es necesario avanzar para reforzar la protección económica frente a eventos extremos.

Además, nuestros modelos econométricos indican que incrementos relativamente modestos en los niveles de aseguramiento podrían generar reducciones apreciables en el impacto económico agregado de los eventos extremos. En concreto, un aumento de un solo punto porcentual en el grado de aseguramiento permitiría reducir los impactos económicos totales entre un 2,5% y un 2,6%.

Nuestro análisis adquiere aún mayor relevancia cuando observamos el impacto que las catástrofes están teniendo sobre la actividad económica y el empleo.

Las catástrofes registradas en 2024 provocaron una reducción estimada del PIB nacional de 1.384 millones de euros y la pérdida equivalente a 27.730 empleos a tiempo completo.

Además, se ha producido un cambio relevante en la distribución sectorial de los impactos.

Tradicionalmente, el daño se concentraba en el sector agrario. Sin embargo, en 2024 el impacto se desplazó hacia sectores industriales y de servicios, especialmente transporte, hostelería y fabricación de mobiliario, lo que refleja la creciente exposición del tejido económico urbano frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Pero junto a la dimensión económica existe otra dimensión que merece especial atención: el coste humano de las catástrofes.

Durante 2024 fallecieron 270 personas como consecuencia directa de eventos catastróficos, la cifra más elevada registrada en España en lo que va de siglo.

El análisis de estas víctimas revela patrones claros de vulnerabilidad asociados a la edad avanzada y a situaciones de dependencia funcional.

Aproximadamente el 48% de los fallecidos tenía más de 70 años.

Asimismo, durante la DANA de Valencia se evidenciaron dificultades relevantes en los sistemas de evacuación inclusiva.

Unas 5.000 personas con movilidad reducida quedaron confinadas en sus viviendas debido a la interrupción del funcionamiento de ascensores, y numerosas personas con discapacidad auditiva no recibieron los avisos de emergencia al haberse difundido exclusivamente mediante señales acústicas.

Estos datos ponen de manifiesto que la resiliencia solo puede considerarse plenamente efectiva cuando incorpora criterios de accesibilidad universal.

La vulnerabilidad territorial se manifiesta también con especial intensidad cuando analizamos el impacto de las catástrofes sobre las infraestructuras críticas.

Los daños registrados en infraestructuras críticas superaron los 1.840 millones de euros.

Los sistemas hídricos concentraron aproximadamente 1.300 millones, seguidos de las infraestructuras ferroviarias y viarias.

En el ámbito energético, cerca de 180.000 usuarios resultaron afectados por interrupciones del suministro eléctrico, mientras que en el ámbito de las telecomunicaciones fue necesario intervenir sobre 245 estaciones base dañadas, con un coste de más de 34 millones de euros.

Este análisis permite comprender mejor la creciente interdependencia entre riesgo climático y continuidad operativa de los servicios esenciales.

Precisamente desde esta perspectiva deben interpretarse también algunas dinámicas de riesgo que están configurando actualmente el escenario español.

Entre ellas destaca, en primer lugar, la interacción entre ordenación territorial y riesgo climático.

Los datos disponibles muestran que tres de cada diez viviendas afectadas por la DANA se construyeron durante los años de la expansión inmobiliaria en zonas previamente identificadas como inundables.

La huella de la inundación coincidió prácticamente con los mapas de peligrosidad existentes.

Este hecho pone de manifiesto la importancia de integrar plenamente la información de riesgo en los procesos de planificación territorial.

Junto a ello, los incendios forestales de nueva generación constituyen otra de las principales amenazas emergentes.

Estos incendios no solo afectan a la biodiversidad, sino que alteran profundamente la estructura del suelo, incrementando la escorrentía superficial y aumentando la vulnerabilidad frente a inundaciones posteriores.

Durante 2024 ardieron aproximadamente 400.000 hectáreas.

Los eventos convectivos severos continúan representando igualmente un riesgo relevante, especialmente en el ámbito agrario, donde el pedrisco concentra aproximadamente el 35% de las pérdidas pecuniarias por rentas.

Finalmente, los riesgos tecnológicos y en cascada están adquiriendo un protagonismo creciente.

Los incidentes recientes en infraestructuras ferroviarias ponen de manifiesto la elevada interdependencia existente entre los distintos sistemas críticos y la necesidad de avanzar hacia enfoques integrados de análisis del riesgo.

Ante este escenario, las lecciones aprendidas en los últimos años permiten identificar algunas prioridades de actuación.

La primera de ellas es reforzar la inversión en prevención e investigación. La evidencia disponible demuestra que cada euro invertido en prevención permite reducir significativamente los costes humanos, económicos y sociales asociados a las catástrofes.

La segunda prioridad es profundizar en los mecanismos de colaboración público-privada.

En este ámbito, el sector asegurador aporta capacidades especialmente relevantes en materia de modelización del riesgo, análisis de exposición y transferencia financiera del impacto de los eventos extremos.

Esta información resulta fundamental para las administraciones públicas y para los operadores de infraestructuras críticas, ya que permite anticipar impactos potenciales, priorizar inversiones en prevención y orientar la planificación territorial y sectorial con criterios técnicos basados en evidencia.

La capacidad de absorber parte del impacto económico de las catástrofes contribuye además de manera directa a estabilizar la actividad productiva tras los eventos extremos y a acelerar los procesos de recuperación territorial.

Por este motivo, la participación del sector asegurador en los marcos de cooperación público-privada no debe entenderse únicamente en términos de cobertura financiera posterior al siniestro, sino también como una contribución estratégica al diseño de políticas de prevención y adaptación.

La tercera prioridad es avanzar en la reducción de la brecha de aseguramiento, reforzando el papel del seguro como instrumento de estabilidad económica y facilitando el acceso a coberturas en zonas de mayor exposición al riesgo.

La cuarta prioridad es impulsar una cultura de autoprotección basada en la educación, la anticipación y la accesibilidad universal.

A partir de este punto, resulta oportuno detenernos brevemente en una cuestión directamente vinculada con el título de mi intervención: las soluciones disponibles para afrontar el desafío que plantea la transformación climática desde la perspectiva del sector asegurador.

En este contexto, el seguro debe entenderse como un instrumento estructural de resiliencia económica y territorial.

El sector asegurador puede desempeñar un papel especialmente relevante incentivando mejores prácticas de prevención mediante mecanismos económicos asociados a las condiciones de cobertura.

La incorporación de planes de contingencia, la existencia de sistemas redundantes, la protección reforzada de infraestructuras críticas o la mejora de los protocolos de continuidad operativa son factores que pueden integrarse en los procesos de suscripción.

Este enfoque permite alinear los incentivos económicos con la reducción del riesgo sistémico, facilitando que la prevención deje de percibirse como un coste adicional y pase a considerarse una inversión estratégica.

A esta función incentivadora se añade la capacidad técnica del sector asegurador en materia de identificación y modelización del riesgo.

La experiencia acumulada en el análisis probabilístico de eventos extremos permite anticipar impactos potenciales sobre infraestructuras críticas y orientar ejercicios de estrés que contribuyen a evaluar la robustez de los sistemas ante escenarios complejos.

La correcta gestión del dato constituye en este ámbito un elemento fundamental.

La disponibilidad de información actualizada sobre exposición, vulnerabilidad e interdependencias entre servicios esenciales permite ajustar las coberturas a los riesgos reales existentes y mejorar la calidad de los procesos de toma de decisiones.

En paralelo, la innovación tecnológica está transformando de manera profunda la capacidad del sector asegurador para analizar y modelizar riesgos catastróficos.

El desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial, el uso de grandes volúmenes de datos y los modelos de simulación avanzada permiten identificar vulnerabilidades con mayor precisión y mejorar la calidad de la respuesta ante eventos extremos.

En este mismo ámbito, el desarrollo de seguros paramétricos representa una evolución especialmente relevante en los mecanismos de transferencia del riesgo.

La activación automática de compensaciones asociadas a determinados umbrales físicos previamente definidos permite reducir los tiempos de respuesta financiera tras una catástrofe y facilita la continuidad de la actividad económica en los territorios afectados.

Desde esta perspectiva, resulta igualmente relevante avanzar en el fortalecimiento de la cultura de resiliencia en el conjunto de la sociedad.

España dispone de capacidades técnicas y operativas sólidas en materia de respuesta ante emergencias. Sin embargo, continúa siendo necesario reforzar la concienciación sobre los riesgos que pueden afectar a la continuidad de los servicios esenciales.

La resiliencia debe consolidarse progresivamente como una política de Estado basada en la prevención, el análisis del riesgo y la inversión sostenida en infraestructuras críticas.

Asimismo, la evolución reciente de los riesgos catastróficos plantea nuevos desafíos en el ámbito de la responsabilidad civil, particularmente en relación con eventos de carácter sistémico que afectan simultáneamente a múltiples sectores y territorios.

En este contexto, la colaboración entre operadores, administraciones públicas y sector asegurador adquiere una relevancia creciente como mecanismo para integrar el conocimiento científico disponible en la gestión práctica del riesgo.

Finalmente, quisiera referirme al significado estratégico de la Directiva Europea 2022/2557 relativa a la Resiliencia de las Entidades Críticas, que representa una oportunidad especialmente relevante para reforzar la continuidad de los servicios esenciales en un entorno marcado por la aceleración del cambio climático.

Uno de los objetivos del Cluster Catástrofes es precisamente contribuir a mejorar la robustez y la capacidad de adaptación de las infraestructuras críticas frente a riesgos naturales, accidentales o antrópicos.

Este trabajo se articula, entre otras iniciativas, a través del Observatorio de Catástrofes y del Think Tank, con nuestro Barómetro, en cuyos Comités Científico y Consultivo participan Protección Civil, la UME y Cruz Roja, junto con organismos sectoriales como UNESPA, el Consorcio de Compensación de Seguros, Agroseguro o AGERS, además de entidades técnicas, centros de investigación y organizaciones del tercer sector.

Nos encontramos en un momento especialmente relevante del proceso de implantación de la Directiva CER en España, que afecta a sectores esenciales como energía, transporte, banca, salud, agua, infraestructuras digitales o cadena alimentaria.

El periodo 2026–2027 será clave para consolidar la estrategia nacional de resiliencia, la evaluación de riesgos y la identificación de las entidades críticas.

Este calendario sitúa a España en una fase decisiva para avanzar hacia una aplicación efectiva de la Directiva, reforzando la coordinación entre administraciones y operadores.

En este contexto, el Cluster Catástrofes y el Instituto de la Ingeniería de España firmamos el pasado 9 de marzo el Manifiesto CER, orientado a reforzar la cooperación técnica entre administraciones públicas, operadores de infraestructuras críticas, sector asegurador, comunidad científica y sociedad civil.

El Manifiesto impulsa la creación de espacios de cooperación técnica, la Mesa de Seguimiento de la Directiva CER, el desarrollo de proyectos piloto y el análisis de interdependencias críticas.

Como instrumento operativo de este Manifiesto hemos constituido la Mesa Técnica Permanente de Seguimiento de la Directiva CER en España, un espacio neutral e independiente de intercambio de conocimiento orientado a elaborar propuestas técnicas para reforzar la resiliencia territorial frente a riesgos complejos.

La ingeniería desempeña un papel clave al reforzar la idea de que la resiliencia no comienza el día de la crisis, sino en la fase de diseño y planificación de las infraestructuras.

La comunidad investigadora aporta la base científica necesaria para sustentar las decisiones en evidencia y desarrollar metodologías avanzadas de análisis.

El Tercer Sector incorpora una visión directa de la vulnerabilidad social y del impacto real de las crisis sobre la ciudadanía.

Permítanme concluir con una reflexión final.

La aceleración de las crisis climáticas está modificando de forma estructural el entorno de riesgos en el que operan nuestras economías, nuestras infraestructuras y nuestros sistemas de protección social.

Hoy, la resiliencia ya no es solo una cuestión asociada a la gestión de emergencias. Es un factor de estabilidad económica, seguridad territorial y continuidad institucional.

La Directiva europea sobre resiliencia de las entidades críticas representa una oportunidad especialmente relevante para España.

Su aplicación permitirá modernizar la gestión del riesgo, reforzar la continuidad de los servicios esenciales y mejorar la protección efectiva de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad frente a eventos extremos.

La experiencia acumulada en los últimos años demuestra que anticipar los riesgos y fortalecer la capacidad de adaptación del conjunto del sistema resulta tan importante como mejorar la respuesta ante emergencias.

En ese esfuerzo, el sector asegurador desempeña un papel especialmente relevante por su capacidad para analizar riesgos agregados, modelizar escenarios complejos e impulsar mecanismos eficaces de transferencia financiera.

La creación de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias supone además un avance importante en el fortalecimiento del marco institucional necesario para desplegar con eficacia la Directiva CER en España.

El año 2026 será especialmente importante para su aplicación efectiva y ofrece una oportunidad clara para consolidar espacios de cooperación técnica estables entre administraciones públicas, operadores de servicios esenciales y sector asegurador.

Desde la Asociación Cluster Catástrofes estamos plenamente comprometidos con este proceso a través del impulso del Manifiesto CER y de la Mesa Técnica Permanente de Seguimiento.

Estoy convencido de que la colaboración entre administraciones públicas, operadores de servicios esenciales y sector asegurador será determinante para proteger el tejido productivo y reforzar la estabilidad económica ante un escenario caracterizado por riesgos cada vez más complejos.

Muchas gracias.